JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
D.E.I.P., nueve de agosto de Dos Mil Veintitrés.

ASUNTO QUE SE TRATA

Se procede a resolver el recurso presentado dentro del proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL ALFONSO RIVERA BOLAÑOS y otros, contra: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Mediante providencia calendada 05 de mayo de la presente anualidad, se negó la corrección aritmética presentada por la apoderada de la entidad demandada. Asimismo, se establecieron los saldos de la obligación para los demandantes Sres. Rafael Alfonso Rivera Bolaños, Jaime Luís Zambrano Barrios y Edgardo Fontalvo Díaz.

Frente a la anterior decisión, los apoderados judiciales de las partes presentaron recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación, en los siguientes términos:

i) Recurso de reposición del apoderado sustituto de la entidad demandada: Señala que su *“representada dio cumplimiento total de la condena, de conformidad a lo ordenado en sentencia, tal como se puede observar en las liquidaciones aportadas en el memorial de fecha 13 de julio de 2021, respecto de cada demandante, en las cuales se evidencian los conceptos, valores, y reajustes aplicados a cada demandante, al igual que la indexación aplicada.*

4. De conformidad a lo antes expuesto, es claro que mi representada dio cumplimiento total a la condena, en debida forma, tal como lo ordenó el fallo, más no como lo indica el despacho que existe diferencia por pagar, por factor de indexación cuando mi representada la aplicó en debida forma al retroactivo de cada demandante, tal como lo establece la fórmula.

5. Por lo anterior, se debe declarar el pago total de la obligación y ordenar entregar los depósitos pendientes a las partes, para así dar por terminado el proceso y archivar el mismo por no quedar montos pendientes por cancelar.”.

Para resolver se rememora que, en la providencia del 05 de mayo de 2023 se resolvió acerca de la petición de corrección aritmética, en donde se decidió negarla argumentándose que *“En el caso examinado, en la providencia adiada 21 de junio de 2021, se practicó la liquidación de las condenas únicamente con relación a los demandantes Sres. Edgardo Fontalvo Díaz, Rafael Alfonso Rivera Bolaños y Jaime Luis Zambrano Barrios.*

En lo que atañe al reajuste pensional convencional de la Ley 4ª de 1976, de carácter compartida con la pensión de vejez, se avista de la liquidación elaborada que se le aplicó el IPC del año inmediatamente anterior en los periodos a que había lugar, cuya reliquidación y diferencias generadas coinciden cuantitativamente con la proporcionada por la parte demandada, no existiendo disconformidad alguna...

(...)

Cuestión distinta es la indexación sobre las diferencias causadas entre el 12 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2019, lo cual debe entenderse como la acción monetaria de actualizar a valor presente una suma de dinero, que en tratándose de prestaciones periódicas como lo son las mesadas pensionales, el cálculo se efectúa con base en el IPC de los meses en mora de cada anualidad, con la fórmula: $VA = VH \times IPC \text{ Final} / IPC \text{ Inicial}$, lo que fue aplicado en forma correcta, por lo que no sale avante la corrección aritmética.

En lo que concierne a los descuentos a salud y a las consignaciones efectuadas por la entidad enjuiciada el 14 de enero de 2021, es de resaltar, que al momento de la expedición del auto del 21 de junio de 2021 no se tenía conocimiento de las aludidas consignaciones, ni ese hecho había sido informado con anterioridad por la parte demandada, por ello, sólo se tuvo en cuenta las consignaciones perpetradas en el mes de diciembre de 2019, resultando improcedente la corrección propalada en esos aspectos.”.

En ese orden de ideas, lo planteado en el recurso de reposición dista de lo que fue definido en el auto fechado 05 de mayo de 2023, dado que aun teniéndose en cuenta los depósitos judiciales que fueron consignados a favor de los demandantes <de los cuales no se tenían conocimiento por no haberse informado> y de los descuentos perpetrados, todavía se generaron diferencias en beneficio de los actores Rafael Alfonso Rivera Bolaños, Jaime Luís Zambrano Barrios y Edgardo Fontalvo Díaz, por lo que no puede hablarse de un cumplimiento total de la obligación, puesto que existen saldos por cubrir que no han sido desvirtuados con ocasión de la liquidación realizada por el juzgado. Aunado al hecho que de cara a los restantes demandantes Edis Alicia Coneo Sarmiento (q.e.p.d.) y Alfredo Enrique Ruiz Ávila, ni siquiera se ha elaborado ninguna liquidación al respecto, de manera que está llamado a fracasar el recurso interpuesto.

ii) Recurso de reposición de la apoderada de los demandantes: Interpone el recurso contra los numerales 2º, 3º y 4º de la providencia en lo que respecta a los descuentos de los aportes a salud, indicando *“que a partir del 1 de enero de 1.994 que no hubiesen causado el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, debían hacer cotización para salud, estos descuentos se les ha venido realizando sobre sus mesadas pensionales, pero si bien es cierto al momento de pensionarse por vejez con COLPENSIONES, estos retroactivos generados con el reconocimiento pensional se giraban a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. por lo que se estaría haciendo un doble pago a los aportes en seguridad social en salud.*

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, atendiendo que esta Ley 100 dispone que a las personas que estuvieran pensionadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley se les reajustara su pensión. En una sola ocasión en un 12% tal prerrogativa legal.”.

En lo que concierne a los descuentos a salud, el Art. 204 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el Art. 1º de la Ley 1250 de 2008 y el Art. 142 de la Ley 2010 de 2019, establece <en forma general> que la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

Dicha norma está orientada a la salvaguarda de la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, por consiguiente, los afiliados que se integran al sistema a través del régimen contributivo son las personas laboralmente activas y los pensionados o jubilados con capacidad de pago, los cuales contribuyen con un importante rubro de ingreso para el Sistema de Seguridad Social en Salud. Así lo ha sostenido en diversas decisiones la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia del 14 de febrero de 2012, magistrado ponente Dr. Rigoberto Echeverri Bueno, radicado N°47.378, donde se cita *“Al respecto, debe decirse que, siendo claro el mandato contenido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, no queda más al pensionado que asumir el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, resultando natural que lo haga desde el momento mismo en que ostenta tal calidad.*

Es lógico pensar que debe el demandante aportar para efectos de la financiación del sistema contributivo, de tal forma que, a pesar de que no hubo prestación del servicio de salud por cuanto en estricto sentido no estaba aún afiliado, mal puede ignorar el sentenciador la carga que a aquél le impone la ley de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, precisamente en razón a su condición de pensionado.

Ciertamente, de no efectuarse los descuentos del retroactivo pensional para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no sólo se desconocerían los principios que debe observar la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, sino también los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994.

Adicionalmente, se advierte que, al no efectuarse el descuento de los aportes para salud, podrían verse comprometidos los derechos del demandante de acceder a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme lo dispone el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.”.

Bajo ese entendido, los descuentos en salud que realizó la entidad demandada al momento de cancelar el retroactivo pensional no resulta desacertado ni desproporcionado, debido a que la ley permite dicha deducción, además, no estamos en observancia de una sentencia con arreglo al inciso 1° del Ar. 143 de la Ley 100 de 1993 y el Art. 42 del Decreto 692 de 1994, en donde la entidad demandada estuviere obligada a reajustar las pensiones causadas con anterioridad al 01 de enero de 1994, en un porcentaje igual a la elevación de la cotización para el sistema de salud a cargo del pensionado, por lo que no prospera el recurso propalado.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad del recurso subsidiario de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las partes, se concederá en el efecto suspensivo, debido a que impide la continuación del proceso, lo precedente, en atención a lo señalado en providencia del 13 de junio de 2022 emitida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, magistrado ponente Dr. Fabián Giovanni González Daza, radicación 08001-3105-007-2010-00668-00, radicado interno 70.832, a través de la cual desató el recurso de queja, declarando mal denegado el recurso de apelación y a su vez lo admitió en virtud del numeral 10° del Art. 65 del C.P.T.S.S., como quiera que se trataba de liquidaciones del crédito derivadas del cumplimiento de la sentencia condenatoria.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

1. Negar el recurso de reposición contra el auto de fecha 05 de mayo de 2023, planteado por el apoderado sustituto de la entidad demandada.
2. Negar el recurso de reposición contra los numerales 2°, 3° y 4° del auto adiado 05 de mayo de 2023, propuesto por la apoderada judicial de los demandantes.
3. Conceder en el efecto suspensivo el recurso subsidiario de apelación presentado por los apoderados judiciales de las partes, conforme al numeral 10° del Art. 65 del C.P.T.S.S.
4. Por rol secretarial y previas las formalidades del reparto, asignar el expediente a la Magistrada de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta ciudad Dra. María Olga Henao Delgado, a fin de que desate el recurso de apelación, ya que tuvo conocimiento del proceso en segunda instancia. Líbrese el oficio de rigor.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ALICIA ELVIRA GARCÍA OSORIO
JUEZ

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Barranquilla, 10 de agosto de 2023
NOTIFICADO POR ESTADO N°123
El Secretario _____
Dairo Marchena Berdugo